

cuando gobernó durante los mejores años de los que ha gozado el país en su historia—, la otra la concibe como un impulso del Estado, riñendo con la modernización capitalista que a su entender no es otra cosa que una expresión del neoliberalismo.

La diferencia no puede ser más relevante: se trata del crecimiento del país, es decir, del bienestar de sus ciudadanos, de la creación de empleo y de bienestar, en fin, de la movilidad social y de la superación de la pobreza.

No cabe duda: hay dos izquierdas. El problema es cuando actúan como si fueran una sola y una diferencia de ese calado es subsumida en aras de alcanzar y administrar el poder.

CLAUDIO HOHMANN

## Futuro del oficialismo

Señor Director:

El editorial del sábado 24 del diario de su dirección, "El futuro del oficialismo", se pregunta sobre el papel del Presidente Gabriel Boric cuando abandone La Moneda. Lo más claro es que aspira volver a La Moneda y trabajará en esa dirección.

No le será fácil. Su gobierno fue opaco, poniendo de manifiesto sus limitaciones como jefe de Estado y jefe de gobierno.

Tampoco tuvo un buen desempeño como líder del Frente Amplio (FA). El irresponsable desempeño del FA en los dos procesos constituyentes, el 9% obtenido por su candidato presidencial en la primaria del oficialismo de junio pasado y la aplastante derrota de este en la elección presidencial de diciembre demostraron que el partido como organización tiene pies de barro.

La página C3 de la edición del viernes proporciona información confirmando este hecho. El FA está fragmentado en 12 grupos, uno de los cuales integra el mandatario. Sus ministros, parlamentarios, dirigentes e intelectuales pertenecen a alguno de estos "lotes". ¿Qué capacidad decisoria puede tener esta organización?

Si Boric no ejerció el liderazgo en el FA cuando ocupaba La Moneda y disponía de los amplísimos recursos de poder de la Presidencia, ¿qué recursos empleará después de dejar La Moneda?

Podrán ponerse al gobierno de Kast los adjetivos que se quiera; el hecho concreto es que llegó a la Presidencia en un contexto político favorecido por el gobierno de Boric, del FA, el PC y el "Socialismo Democrático".

CARLOS HUNEUS

## Incendios y materiales de construcción

Señor Director:

A propósito de la carta "Construir rápido, quemar rápido", resulta necesario aclarar un punto que se insinúa sin decirse explícitamente: cuando se habla de "sistemas y materiales combustibles", se está aludiendo a la construcción en madera. Esa alusión merece una discusión técnica y honesta, no eufemismos.

Como ingeniero Forestal, coincido en que la forma en que se ha ocupado el territorio —viviendas excesivamente próximas, ausencia de áreas de amortiguación, calles estrechas, escaso manejo del entorno vegetal y débil fiscalización— ha convertido incendios previsibles en tragedias evitables. Ese diag-

nóstico es correcto y ampliamente conocido. Lo que no es correcto es trasladar esa responsabilidad al material constructivo. No existe evidencia técnica que permita sostener que reemplazar la madera por hormigón o albañilería reduzca, por sí solo, el riesgo. En incendios de alta intensidad, el hormigón pierde resistencia, el acero se deforma y las estructuras colapsan. La diferencia es que la madera estructural normada presenta un comportamiento frente al fuego conocido y predecible, lo que permite diseñar con criterios de seguridad.

Es evidente que cuando una vivienda se quema se pierde el patrimonio de una familia, con costos sociales, económicos y humanos profundos. Precisamente por eso el debate debe ser serio. Simplificarlo a una supuesta superioridad de ciertos materiales desvía la atención del problema real. Chile cuenta con normas, conocimiento técnico y una larga tradición de construcción en madera. El desafío no es prohibir materiales, sino tomar decisiones coherentes con los riesgos territoriales y aplicar la normativa existente con responsabilidad.

GERARDO LUDWIG SCHILLING  
Ingeniero Forestal

## Emergencia forestal

Señor Director:

Los incendios de interfaz urbano-rural que han afectado al sur de Chile no solo revelan la fragilidad del territorio frente a amenazas conocidas, sino también las consecuencias concretas de decisiones políticas tomadas con anterioridad y que hoy pasan casi desapercibidas en el debate público.

Según el marco nacional de gestión del riesgo de desastres, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) —en sus niveles comunal, provincial, regional y nacional— son los encargados de coordinar acciones en las fases de preparación, respuesta y rehabilitación. Sin embargo, estas estructuras requieren algo básico para funcionar: recursos oportunos y continuidad presupuestaria.

Durante 2025, la oposición rechazó en la Cámara de Diputadas y Diputados partidas presupuestarias clave asociadas al funcionamiento del Estado, incluidas aquellas vinculadas a la gestión de emergencias. No fue sino hasta el 29 de noviembre cuando dichas partidas fueron finalmente aprobadas por el Senado. Este retraso político-administrativo ralentizó la ejecución presupuestaria, limitó la planificación y dejó al sistema operando con márgenes mínimos. Un mes y medio después, el país enfrenta una catástrofe antrópica de gran magnitud.

Pretender que este desfase no tiene efectos reales es, al menos, irresponsable. La lentitud del Estado en emergencias no responde solo a burocracia o licitaciones obligatorias, sino también a decisiones políticas que postergan recursos críticos por cálculo, ego o disputa ideológica.

A este escenario se suma otro problema grave: la proliferación de iniciativas individuales impulsadas por *influencers* y figuras públicas que, en lugar de coordinarse con Senapred, municipios o centros de acopio oficiales, canalizan ayuda desde el protagonismo personal. Esta lógica de figuración desordena la distribución de recursos y daña una fase esencial del ciclo posemer-